



Proceso

informativo semanal

Año 28, N° 1239

Mayo 2, 2007

ISSN 0259-9864

"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

Los desafíos de Aparecida

2

Económico

Crecimiento, TLC y canasta básica en El Salvador

4

Reporte IUDOP

Lo privado y lo público: un vistazo a la 'opinión pública' de las salvadoreñas

7

Reporte IDHUCA

Injusticia sádica

10

documento

Panorama social de América Latina 2006

12

documento

Resumen ejecutivo: Informe de Progreso Educativo en El Salvador 2006 (I)

15

Lo privado y lo público: un vistazo a la “opinión pública” de las salvadoreñas

Muchas veces se concibe la opinión pública como una especie de noción o concepto homogéneo sobre la realidad; otras visiones la entienden como la suma de posiciones individuales sobre un tema. Otras miradas —aún más superficiales— la restringen a cifras provenientes de una encuesta, o a predicciones sobre la victoria de algún candidato. Si bien el concepto de opinión pública trasciende la mera discusión acerca de su medición o su abordaje empírico, es preciso rescatar la dimensión de la opinión pública como reflejo de la histórica condición psicosocial de las personas, en eterna vigilancia y comunicación con su entorno. Es decir, entender la opinión pública como expresión de la tensión permanente entre el individuo y su contexto histórico: entre el nivel micro (convicciones, creencias, valoraciones individuales) y el macro (normas, reglas y posicionamientos generales como parte de consensos sociales más amplios y a los cuales las personas se encuentran más o menos sujetas).

Una discusión más profunda sobre los modos de analizar la opinión pública trasciende los propósitos de este escrito. Lo que se quiere relevar es la forma en que la expresión de una opinión, de una percepción o una valoración se encuentra en íntima imbricación con las características y la extracción social e histórica de quien la construye y la declara en una encuesta.

En este sentido, cuando se habla de las opiniones de las mujeres, se tiene que tener en cuenta tanto la heterogeneidad de este sector, como la dialéctica entre éstas y su entorno, históricamente desfavorable, injusto y desigual respecto a otros grupos ciudadanos. La Encuesta de Hogares y

Propósitos Múltiples (EHPM) de 2005 señala que más de la mitad de la población salvadoreña (52.7%) está constituida por mujeres. Esta ventaja numérica no se traduce en oportunidades y ventajas sociales o económicas: por ejemplo, la tasa de analfabetismo femenina general asciende al 17.5% a nivel nacional, desciende entre las mujeres urbanas al 12.4%, y se dispara entre las rurales al 25.9%; todas ellas proporciones más elevadas en comparación con las tasas masculinas de analfabetismo (11.8% a nivel nacional, 6.4% a nivel de los hombres urbanos y del 20% entre los rurales).

Por otra parte, de todos los hogares contabilizados en la EHPM para el 2005, la tercera parte corresponde a hogares liderados por una mujer, y de éstos, cerca del 31% tiene como jefa a una mujer sin escolaridad. Estas desventajas en su educación formal no la eximen de tener que trabajar y por tanto, asumir una doble jornada al convertirse en el sostén económico de la familia, al tiempo que cargan con las tradicionales responsabilidades domésticas y del cuidado de hijos/as. Encima, perciben un salario más bajo que los hombres (cuando perciben algún ingreso), y tienen una mayor participación en el sector informal de la economía o en áreas productivas que ofrecen empleos de menor calidad, sin beneficios ni seguridad social.

En cuanto a la violencia, éstas tampoco quedan eximidas, ya que si bien cuantitativamente la violencia criminal en los espacios públicos afecta en mayor número a los hombres jóvenes, son las mujeres las víctimas más frecuentes de la violencia en el espacio privado, una violencia menos denunciada y, por tanto, menos visible, pero con consecuencias no menos trágicas. Por ejemplo,

el informe del Instituto de Medicina Legal señala que 390 mujeres fueron asesinadas en circunstancias diversas durante 2005, lo cual implicaría un promedio de 32.5 mujeres asesinadas al mes, o lo que sería igual, una diaria. De hecho, hay indicios que apuntan a un incremento en las tasas de homicidios femeninos en los últimos años.

Este rápido vistazo al contexto en que muchas mujeres se encuentran insertas podría ayudar a entender la forma en que se construye la "opinión pública" de este sector de población. Por ejemplo, su percepción general acerca de la situación del país suele ser menos optimista que la de los ciudadanos: consultadas por el IUDOP a final del año recién pasado acerca de cómo percibían la pobreza en el país, al menos 3 de cada 5 mujeres salvadoreñas (62%) considera que la pobreza en el país aumentó durante 2006, en contraste con el 57.1% de hombres que opinó lo mismo. Sus valoraciones acerca de la situación económica del país tampoco son muy optimistas, pues de las más de 600 mujeres consultadas en la encuesta de finales de año, un 56.4% de ellas consideró que la situación económica del país había empeorado, frente al 49.1% de hombres que tenían la misma opinión.

La tendencia en el caso de los hombres es a considerar que la situación económica del país se había mantenido, e incluso —para el 8.7% de ellos— había mejorado durante el año pasado. Estas discrepancias en las opiniones entre hombres y mujeres se reducen al valorar ya no la situación de la economía nacional, sino la propia situación económica familiar, en donde las opiniones de poco más de la mitad de la ciudadanía —hombres y mujeres— considera que ésta se había mantenido igual. Sin embargo, para más de la tercera parte de mujeres (34.9%) la

situación económica de su familia empeoró durante el año recién pasado, lo cual suele ser reiterado con mayor frecuencia entre aquellas mujeres con niveles educativos e ingresos familiares más bajos. De hecho, la mayoría consideró que el costo de la vida en el país aumentó mucho durante el año recién pasado.

Frente a estas visiones que reflejan en buena medida la precariedad y dificultades en que sobreviven muchas de las mujeres y sus familias en el país, los resultados del sondeo reflejan también que, paradójicamente, muchas valoran en forma más positiva que los hombres el desempeño gubernamental. Por ejemplo, para el 28.9% de ellas, el gobierno está cumpliendo con su promesa de mejorar la situación social del país, frente a un 20% de hombres que opinan lo mismo. En esa misma línea, las mujeres (como grupo) otorgan una valoración al desempeño gubernamental más elevada (5.96) que la otorgada por los hombres (5.4), a la vez que tienden a opinar más favorablemente acerca del impacto que en materia de salud y pobreza pueden tener programas como FOSALUD y RED SOLIDARIA, entre otros aspectos.

¿Cómo podrían explicarse estas aparentes contradicciones? Precisamente, a partir de esa dimensión dialéctica entre la persona —en este caso, las mujeres— y su entorno, en la construcción de sus opiniones y posiciones acerca de su realidad. Y una de las claves para hacerlo viene dada por la educación. Ésta no solo se constituye en una expresión de la condición de marginación y exclusión social de un sector (cuando se carece de ella), sino que también se convierte en ese filtro imprescindible para la interpretación informada del entorno.

Como ya se mencionaba anteriormente, en términos generales, las mujeres salvado-

reñas han permanecido tradicionalmente en una situación de marginación, desventaja y exclusión respecto a los hombres; y dentro de ellas, hay algunas en situación más precaria que otras. Esto se evidencia no solo en las cifras oficiales y en las estadísticas nacionales, sino cada vez más en la cantidad de mujeres —jóvenes, adultas y de la tercera edad— que sufren la sistemática discriminación social, económica, política y educativa, expresada en ausencia de políticas estatales claras y acciones gubernamentales eficaces encaminadas a transformar su situación.

La valoración negativa de muchas mujeres acerca de su situación económica es consistente con los desafíos que tienen que enfrentar para asegurar la propia supervivencia y la familiar. Pero por otro lado, la desinformación y los bajos niveles educativos también pasan su factura, a la hora de valorar las acciones que deberían ir encaminadas a asegurar las condiciones básicas para que ellas puedan ejercer su ciudadanía social, en el pleno goce de derechos básicos como acceso a salud, a educación, a empleos dignos. En este sentido, y si bien una exploración más detenida de los datos ameritaría un análisis más extenso, los mismos datos de la encuesta que arrojan una valoración más indulgente hacia las políticas y el desempeño gubernamental de las mujeres, en contraste con la que hacen los hombres, también expresan diferencias en el seno del grupo de mujeres. Y estas diferencias vienen dadas, en muchas ocasiones y con gran impacto, a partir del nivel educativo del que gozan o carecen. Por mencionar un par de ejemplos: el 40.7% de aquellas sin ninguna educación considera que Saca está gobernando bien

el país, una proporción que desciende al 22.5% entre aquellas con educación superior. Siguiendo la misma tendencia, quienes cuentan con niveles educativos superiores suelen ser más escépticas en relación con el desempeño gubernamental en materia de mejoras sociales para el país, en el desempeño de sus funcionarios, así como también en relación con algunos de sus programas más insignes de combate a la pobreza y fomento de la salud.

Ciertamente, la educación no es la única variable que puede estar mediando en la forma en que las mujeres valoran su contexto. Sin embargo, es una variable que decisivamente contribuye a la construcción de la propia subjetividad, a la visión del mundo y la interpretación del mismo, a esa dimensión “privada” de la opinión pública. En una palabra, es en muchos casos el elemento desideologizador, que marca las diferencias entre simplemente dar una respuesta o realmente asumir informadamente una posición. Diferencias que no solo se expresarían en una mejor preparación y mayor acceso a oportunidades de desarrollo, sino también en una más informada y crítica manera de entender la realidad. La educación se constituye entonces en un importante elemento configurador de esa subjetividad, así como también en el filtro para entender e integrar, en forma más congruente, esa dimensión social de la misma. Lo que en consecuencia permitiría a muchas mujeres —sobre todo a aquellas en situación de mayor desventaja— entender el rol privilegiado que la clase política del país ha jugado históricamente en la construcción y perpetuación del contexto marginador, injusto y excluyente en que viven.